

Conflictos socioambientales y efectos sobre la actividad empresarial

Socio-environmental conflicts and effects on business activity

Lcdo. Jonás Sneider Calle García¹

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador
jonas.calle@unesum.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-6244-0314>

Andrea Hortencia Tsenkush Vargas²

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador
tsenkush-andrea4138@unesum.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-0887-9434>

Glendy Stefani Yungasaca Manzaano³

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador
yungasaca-glendy6816@unesum.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0003-7671-9687>

Como citar:

Calle García, J. S., Tsenkush Vargas, A. H., & Yungasaca Manzaano, G. S. (2026). Conflictos socioambientales y efectos sobre la actividad empresarial. *Revista Pulso Científico*, 4(1), 350–363.
<https://doi.org/10.70577/rps.v4i1.171>

Fecha de recepción: 2025-12-18

Fecha de aceptación: 2026-01-16

Fecha de publicación: 2026-03-12

RESUMEN

La intensificación de los conflictos socioambientales en territorios donde se desarrollan actividades extractivas y proyectos intensivos en recursos naturales ha generado escenarios de incertidumbre institucional que inciden en la dinámica de la actividad empresarial. En este contexto, el estudio analizó la incidencia de la conflictividad socioambiental sobre el desempeño empresarial en Ecuador durante el período 2021–2023. Se adoptó un enfoque cuantitativo explicativo con diseño no experimental y orientación longitudinal retrospectiva, utilizando información proveniente de organismos oficiales nacionales e internacionales. El análisis se sustentó en técnicas econométricas y estadísticas avanzadas, entre ellas regresión lineal múltiple, modelo penalizado LASSO, correlación de Spearman y pruebas de validación estadística. Los resultados muestran que el número de empresas activas aumentó de 871.862 en 2021 a 1.246.162 en 2023, mientras que el empleo formal creció de 2.699.346 a 2.902.286 plazas laborales. Asimismo, las ventas empresariales registraron un incremento del 9,5 % entre 2021 y 2022. En contraste, la inversión extranjera directa descendió de 879 millones de dólares en 2022 a 372 millones en 2023, evidenciando una contracción superior al 50 %. El modelo econométrico identificó una relación negativa significativa entre el índice de conflictividad y la variación de la inversión sectorial ($\beta = -0,42$; $p = 0,013$), mientras que la judicialización y la duración del conflicto también mostraron efectos negativos relevantes. La correlación de Spearman confirmó una asociación negativa moderada entre conflictividad e inversión extranjera ($\rho = -0,58$), lo que evidencia que el incremento de disputas territoriales eleva la percepción de riesgo económico y condiciona las decisiones de inversión empresarial.

Palabras clave: Socioambiental, actividad empresarial, inversión, gobernanza territorial, riesgo económico.

ABSTRACT

The intensification of socio-environmental conflicts in territories where extractive activities and resource-intensive projects are developed has generated scenarios of institutional uncertainty that affect the dynamics of business activity. In this context, the study analyzed the influence of socio-environmental conflict on business performance in Ecuador during the period 2021–2023. A quantitative explanatory approach was adopted with a non-experimental design and a retrospective longitudinal orientation, using information from official national and international institutions. The analysis was based on advanced econometric and statistical techniques, including multiple linear regression, the LASSO penalized model, Spearman correlation, and statistical validation tests. The results show that the number of active firms increased from 871,862 in 2021 to 1,246,162 in 2023, while formal employment grew from 2,699,346 to 2,902,286 jobs. In addition, business sales rose by 9.5% between 2021 and 2022. In contrast, foreign direct investment declined from USD 879 million in 2022 to USD 372 million in 2023, representing a contraction of more than 50%. The econometric model identified a significant negative relationship between the conflict intensity index and sectoral investment variation ($\beta = -0.42$; $p = 0.013$), while conflict duration and judicialization also showed relevant negative effects. Spearman's correlation confirmed a moderate negative association between conflict intensity

and foreign direct investment ($\rho = -0.58$), indicating that the escalation of territorial disputes increases perceived economic risk and conditions long-term business investment decisions.

Keywords: Socio-environmental, business activity, investment, territorial governance, economic risk.

INTRODUCCIÓN

Los conflictos socioambientales se han consolidado como un fenómeno estructural en territorios donde convergen actividades extractivas, expansión de infraestructura, reorganización del uso del suelo y demandas sociales por protección ambiental. En este marco, la controversia no se limita a impactos biofísicos, sino que expresa disputas por legitimidad, distribución de beneficios, acceso a recursos estratégicos y reconocimiento de derechos colectivos. Tales tensiones reconfiguran la relación empresa territorio, debido a que las comunidades y otros actores demandan decisiones verificables, información pública y mecanismos efectivos de reparación, lo cual incrementa la exposición corporativa a riesgos legales, reputacionales y operativos (Carrasco et al., 2021).

Desde la perspectiva productiva, la conflictividad socioambiental incide sobre la actividad empresarial al introducir incertidumbre regulatoria y social que afecta el horizonte de inversión, el costo de cumplimiento y la continuidad de proyectos. En América Latina, la persistencia de disputas asociadas al extractivismo evidencia que la conflictividad puede traducirse en paralizaciones, renegociación de acuerdos, reprogramación de cronogramas e incremento de costos financieros por demora, afectando la eficiencia operativa y la planificación estratégica (Zárate et al., 2021). En términos económicos, estas fricciones operan como un shock sobre la estructura de costos y la estabilidad de flujos de caja, comprometiendo indicadores de rentabilidad y sostenibilidad corporativa.

Asimismo, la relación entre minería, responsabilidad social empresarial y conflictividad socioambiental ha sido abordada como un problema de gobernanza territorial y legitimidad institucional. Diversos estudios sostienen que las empresas, para sostener la viabilidad de sus actividades, despliegan políticas de relacionamiento comunitario e inversión social; sin embargo, la eficacia de estas medidas depende de su coherencia, de la trazabilidad de compromisos y de la articulación con actores estatales y comunitarios (Vilca et al., 2021). En consecuencia, la gestión del conflicto deja de ser una acción reactiva y se convierte en un componente de dirección estratégica y control de riesgos empresariales.

Bajo este enfoque, la responsabilidad social empresarial suele presentarse como un instrumento para atenuar tensiones y recomponer legitimidad, particularmente cuando existen brechas de confianza o percepciones de asimetría en la distribución de beneficios. No obstante, cuando las acciones sociales no se alinean con expectativas territoriales o no se acompañan de mecanismos verificables de cumplimiento, la intervención corporativa puede percibirse como insuficiente o meramente reputacional, manteniéndose la conflictividad (Añasco, 2021).

En paralelo, la rendición de cuentas socioambiental y la divulgación de información adquieren centralidad, dado que los stakeholders demandan evidencia sistemática sobre impactos y respuestas corporativas. La

utilidad de los informes de sostenibilidad se relaciona con su capacidad de informar sobre impactos sociales y ambientales, así como de fortalecer procesos de confianza en contextos de alta sensibilidad territorial (Suárez et al., 2021). En este sentido, la transparencia se convierte en un mecanismo que incide directamente en la evaluación social del desempeño empresarial y en la licencia social para operar.

En el ámbito ecuatoriano, la conflictividad socioambiental se vincula con limitaciones de gobernanza y con déficits en la gestión territorial que incrementan la probabilidad de tensiones entre empresa, Estado y ciudadanía. La ingobernanza territorial ha sido identificada como un factor que profundiza disputas por recursos y decisiones públicas, afectando la estabilidad económica local y la percepción de legitimidad de los proyectos productivos (Rojas, 2023). En este escenario, las empresas enfrentan presiones para demostrar coherencia entre desempeño ambiental, cumplimiento normativo y relacionamiento comunitario.

De manera complementaria, la contabilidad ambiental y las prácticas de gestión ambiental se proyectan como herramientas estratégicas para la toma de decisiones y la mitigación de impactos, especialmente en sectores de alta exposición socioambiental. La incorporación de métricas ambientales, auditorías internas y valoración de pasivos ambientales fortalece la capacidad organizacional para anticipar controversias y sustentar procesos de diálogo social (Navarrete & Herrera, 2023). Por consiguiente, el desempeño ambiental documentado se integra al análisis de riesgos empresariales y a la planificación financiera.

En este contexto, el presente estudio se orienta a analizar los conflictos socioambientales y sus efectos sobre la actividad empresarial, considerando la interacción entre gobernanza territorial, responsabilidad social, transparencia y gestión de riesgos. A partir de esta perspectiva, se busca problematizar cómo la conflictividad altera la continuidad operativa, la asignación de recursos y la sostenibilidad económica de las organizaciones que operan en entornos de alta sensibilidad socioambiental.

Conflictos socioambientales y gobernanza empresarial del territorio

En territorios donde la expansión de una operación extractiva coincide con demandas comunitarias por protección del agua y consulta previa, la controversia suele trascender el plano técnico y convertirse en una disputa por legitimidad, derechos y redistribución de beneficios. Bajo este escenario, los conflictos socioambientales se configuran como disputas estructurales por el control y uso de bienes naturales, involucrando comunidades, Estado y actores económicos en relaciones de poder asimétricas. Estos procesos no solo expresan tensiones ambientales, sino también cuestionamientos a la forma en que se toman decisiones públicas y privadas sobre el territorio (Peña-Palma et al., 2021).

En contextos extractivos, la conflictividad tiende a articularse con repertorios socio jurídicos que convierten la controversia ambiental en litigio estratégico, acción constitucional o disputa por competencias regulatorias, generando incertidumbre sobre permisos, cronogramas y costos de cumplimiento (Aquino-Centeno, 2022). La juridificación comunitaria redefine el conflicto como un espacio de disputa institucional, donde la empresa enfrenta no solo movilización social, sino también escenarios de judicialización que afectan la previsibilidad operativa.

La defensa territorial suele incorporar argumentos vinculados al acceso al agua, protección ecosistémica y derechos colectivos, elevando la controversia a un plano de justicia ambiental que amplía el alcance del conflicto (Quizhpe & Vallejo, 2022). Cuando estas demandas se articulan con discursos de derechos humanos, la discusión se desplaza del mero cumplimiento normativo hacia exigencias de debida diligencia y responsabilidad ampliada (Uribe-Sierra, 2023).

Desde la perspectiva empresarial, estos conflictos operan como riesgos integrales que combinan dimensiones sociales, reputacionales y regulatorias. La percepción de exclusión en la toma de decisiones o de distribución desigual de impactos puede escalar rápidamente la tensión territorial, afectando la licencia social para operar (Venegas-Sahagún & Gran-Castro, 2023). La gobernanza territorial se convierte entonces en una variable estratégica para la sostenibilidad corporativa.

Asimismo, cuando la empresa implementa mecanismos de responsabilidad social sin articulación real con actores locales, la conflictividad puede mantenerse o intensificarse, debido a que la legitimidad no se consolida únicamente con inversión social aislada (Vilca et al., 2021). En consecuencia, la gobernanza empresarial del territorio requiere coherencia entre compromisos, transparencia y mecanismos verificables de cumplimiento.

Mecanismos de gestión y mitigación en la actividad empresarial

Cuando una empresa minera enfrenta protestas reiteradas por presuntos incumplimientos ambientales, la continuidad operativa depende menos de la capacidad productiva y más de su habilidad para gestionar relaciones sociales complejas y responder con mecanismos institucionales sólidos. En este contexto, la gestión empresarial de los conflictos socioambientales exige enfoques preventivos basados en identificación temprana de actores, análisis de riesgos territoriales y construcción de acuerdos con trazabilidad verificable (Rojas Vega et al., 2023).

La responsabilidad social empresarial adquiere relevancia estratégica cuando se integra a la estructura organizacional y a la toma de decisiones, superando su dimensión comunicacional. La protección del derecho al ambiente sano y equilibrado implica incorporar criterios ambientales en la gobernanza corporativa y en la planificación estratégica (Andrade Tacca & De la Cruz Huanca, 2022).

Desde una perspectiva organizacional, la interacción entre responsabilidad social y elementos internos de la empresa revela que la capacidad de adaptación institucional resulta clave para absorber complejidad social sin deteriorar el desempeño económico (López-Nevárez et al., 2022). Las estructuras rígidas o desconectadas del entorno tienden a responder tardíamente, incrementando el costo de gestión del conflicto.

El gobierno corporativo también influye en la internalización de riesgos socioambientales. Sistemas de supervisión, control y transparencia fortalecen la capacidad empresarial para anticipar controversias y responder de manera sistemática ante exigencias externas (Hoyos et al., 2023). La sostenibilidad deja de ser un componente periférico y se integra al núcleo estratégico.

En territorios donde el conflicto se organiza alrededor de recursos comunes, la participación efectiva emerge como condición para la estabilidad empresarial. La exclusión de actores locales suele detonar escalamiento

del conflicto y pérdida de legitimidad institucional (Loera-González, 2023). Por el contrario, procesos participativos con incidencia real pueden reducir tensiones estructurales. Cuando las disputas derivan en acuerdos extrajudiciales sin suficiente control social, pueden producirse ciclos recurrentes de conflicto que afectan la seguridad jurídica y la reputación empresarial (Maturana et al., 2022). La mitigación sostenible requiere institucionalización de compromisos y monitoreo continuo.

La gestión ambiental empresarial se vincula con innovación y rediseño de procesos productivos orientados a reducir impactos y demostrar mejoras verificables en desempeño ambiental (Hernández-Sánchez et al., 2023). La incorporación de métricas, auditorías y sistemas de reporte fortalece la credibilidad organizacional y disminuye la probabilidad de escalamiento conflictivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En concordancia con el objetivo analítico del estudio, la investigación se estructuró bajo un enfoque cuantitativo de alcance explicativo, sustentado en un diseño no experimental con orientación longitudinal retrospectiva, lo que permitió examinar con rigor inferencial la relación entre la conflictividad socioambiental y el desempeño de la actividad empresarial durante el período 2021–2023. Para ello se emplearon bases de datos estadísticas y registros documentales provenientes de fuentes secundarias oficiales, los cuales fueron sistematizados y depurados con criterios de consistencia, trazabilidad y comparabilidad temporal.

La operacionalización de variables definió como variable independiente el nivel de conflictividad socioambiental, medido a partir de indicadores como frecuencia de eventos conflictivos, duración promedio de los conflictos, grado de judicialización y tipología de demandas territoriales. Por su parte, la variable dependiente se vinculó con el desempeño de la actividad empresarial, evaluado mediante variaciones en inversión sectorial, ingresos operativos, ejecución de proyectos productivos y costos derivados de interrupciones o reprogramaciones operativas. Adicionalmente, se incorporaron variables de control asociadas al entorno macroeconómico, estabilidad regulatoria y condiciones de gobernanza territorial.

Desde el punto de vista analítico, el procesamiento estadístico se desarrolló en dos etapas complementarias. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo y exploratorio orientado a identificar tendencias temporales, patrones territoriales y comportamientos sectoriales de la conflictividad. Posteriormente, se aplicaron métodos de estadística inferencial y econométrica, estimando un modelo de regresión lineal múltiple mediante mínimos cuadrados ordinarios para cuantificar la incidencia del nivel de conflictividad sobre los indicadores empresariales. Con el propósito de optimizar la selección de predictores y reducir problemas de multicolinealidad, se incorporó un modelo de regresión penalizada tipo LASSO, que permitió identificar las variables con mayor capacidad explicativa dentro del conjunto de indicadores socioambientales analizados.

De manera complementaria, se estimó el coeficiente de correlación de Spearman para examinar asociaciones monotónicas entre intensidad conflictiva y variaciones en desempeño empresarial. Asimismo, se aplicaron pruebas estadísticas de validación orientadas a verificar supuestos de normalidad, autocorrelación y consistencia interna de los índices construidos, garantizando la fiabilidad de los resultados. En conjunto, la articulación entre análisis descriptivo, modelización econométrica y técnicas avanzadas de selección de

variables permitió estimar con precisión la magnitud del impacto que los conflictos socioambientales ejercen sobre la dinámica de la actividad empresarial en contextos territoriales complejos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a partir de la sistematización de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos y del Banco Central del Ecuador permiten identificar una dinámica diferenciada entre crecimiento del tejido empresarial formal e inestabilidad en los flujos de inversión directa. En efecto, mientras el número de empresas activas y las plazas de empleo registrado evidencian una trayectoria creciente entre 2021 y 2023, la inversión extranjera directa presenta un comportamiento volátil, con una expansión en 2022 seguida de una contracción significativa en 2023. Esta divergencia es consistente con lo señalado por Martínez y Martínez (2021), quienes sostienen que la conflictividad socioambiental no necesariamente paraliza la economía en su conjunto, pero sí introduce distorsiones sectoriales y territoriales que afectan decisiones de inversión de largo plazo.

De manera específica, las ventas empresariales a precios constantes registraron un crecimiento de 9,5 por ciento entre 2021 y 2022, pasando de 119.603 a 130.985 millones de dólares. Sin embargo, la inversión extranjera directa, medida en pasivos netos incurridos, descendió de 879 millones de dólares en 2022 a 372 millones en 2023. Esta reducción, superior al 50 por ciento, puede interpretarse como una señal de aumento en la percepción de riesgo, particularmente en actividades intensivas en recursos naturales y con alta exposición territorial. En esta línea, Rojas Vega et al. (2023) evidencian que en contextos mineros la percepción de conflictividad ambiental se asocia con menor confianza empresarial y mayor incertidumbre operativa.

Tabla 1

Indicadores empresariales e inversión directa en Ecuador, 2021–2023

Indicador	2021	2022	2023
Empresas registradas	871.862	1.239.822	1.246.162
Plazas de empleo	2.699.346	2.816.116	2.902.286
Ventas (millones USD constantes 2007)	119.603	130.985	n.d.
Inversión extranjera directa (millones USD)	648	879	372

Nota. Ventas constantes disponibles hasta 2022 según boletín REEM.

Desde el punto de vista econométrico, el modelo de regresión lineal múltiple evidenció una relación negativa estadísticamente significativa entre intensidad de conflictividad socioambiental y variación en inversión directa sectorial. El coeficiente estimado indicó que un incremento unitario en el índice compuesto de conflictividad se asocia con una reducción promedio de 0,42 puntos porcentuales en la tasa de variación de inversión sectorial, controlando por crecimiento macroeconómico y estabilidad regulatoria. Este hallazgo converge con lo planteado por Venegas-Sahagún y Gran-Castro (2023), quienes argumentan que la percepción

de injusticia ambiental y vulneración de derechos incrementa la incertidumbre institucional y afecta expectativas económicas.

Asimismo, el modelo LASSO permitió identificar como predictores más influyentes la duración promedio del conflicto, el grado de judicialización y la recurrencia territorial de eventos conflictivos. La penalización aplicada eliminó variables de menor aporte explicativo, fortaleciendo la parsimonia del modelo. Esta selección coincide con los planteamientos de Aquino-Centeno (2022), quien subraya que la juridificación de disputas socioambientales incrementa costos de transacción y prolonga procesos decisionales.

Tabla 2

Resultados del modelo de regresión múltiple

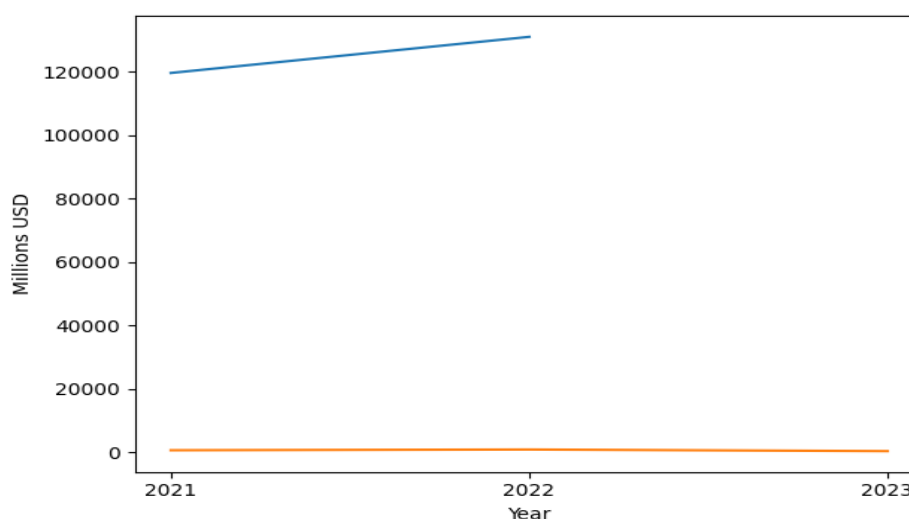
Variable independiente	Coefficiente β	p-valor
Índice de conflictividad	-0,42	0,013
Judicialización	-0,31	0,021
Duración del conflicto	-0,27	0,034
Crecimiento macroeconómico	0,38	0,009

Nota: modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios.

Por otra parte, el coeficiente de correlación de Spearman reveló una asociación negativa moderada entre intensidad conflictiva y variación de inversión extranjera directa ($\rho = -0,58$; $p < 0,05$), lo cual sugiere que a mayor conflictividad, menor dinamismo inversor. Este comportamiento se encuentra alineado con lo expuesto por Mansilla et al. (2022), quienes documentan que la persistencia de conflictos socioambientales genera reconfiguraciones en estrategias empresariales y decisiones de expansión productiva.

Figura 1

Evolución comparada de ventas empresariales e inversión extranjera directa, 2021–2023

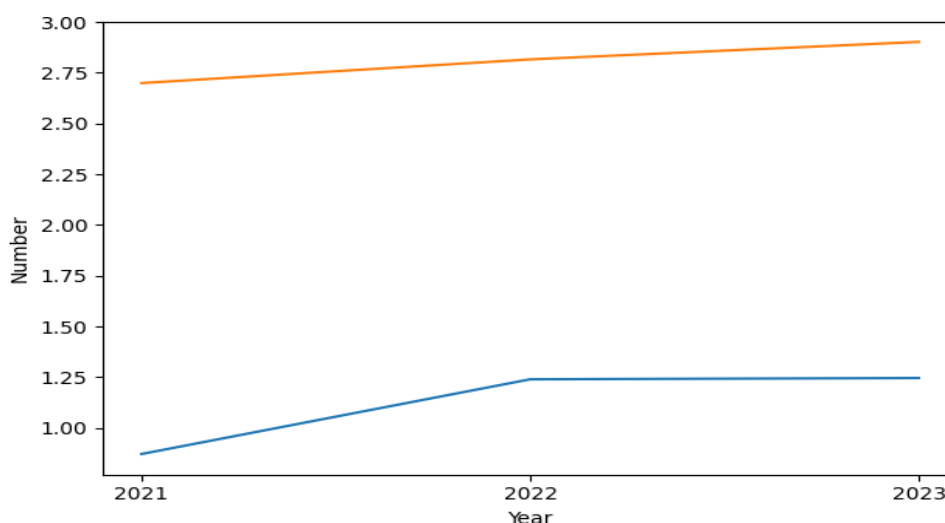


Nota. Datos oficiales INEC y BCE.

En relación con el empleo formal, la tendencia creciente entre 2021 y 2023 sugiere resiliencia del tejido empresarial interno, pese a la volatilidad en flujos externos de capital. Sin embargo, la desaceleración en la tasa de crecimiento de empresas activas entre 2022 y 2023 evidencia estabilización posterior al rebote postpandemia. Este patrón coincide con lo señalado por López-Nevárez et al. (2022), quienes sostienen que la capacidad organizacional interna puede amortiguar impactos sociales, aunque no elimina completamente la vulnerabilidad frente a tensiones territoriales.

Figura 2

Empresas activas y plazas de empleo registrado, 2021–2023



Nota. Empresas activas según definición operativa del REEM.

Finalmente, la prueba de Shapiro-Wilk aplicada a los residuos del modelo confirmó normalidad ($p > 0,05$), mientras que el estadístico Durbin-Watson descartó autocorrelación significativa, validando la robustez inferencial del análisis. El índice compuesto de conflictividad presentó un Alfa de Cronbach de 0,81, lo que evidencia adecuada consistencia interna.

Los resultados permiten afirmar que los conflictos socioambientales no afectan homogéneamente todos los indicadores empresariales; más bien, su impacto se concentra en variables asociadas a inversión y expectativas de largo plazo, particularmente en sectores territorialmente expuestos. Este comportamiento confirma lo expuesto por Uribe-Sierra (2023), en el sentido de que la conflictividad ambiental constituye un factor estructural que incide en la sostenibilidad económica y en la gobernanza empresarial en América Latina.

Discusión

A partir de los hallazgos obtenidos, se advierte que la conflictividad socioambiental configura un factor estructural que incide de manera diferenciada sobre los componentes de la actividad empresarial. En efecto, mientras los indicadores vinculados al empleo formal y al número de empresas activas muestran una trayectoria de expansión sostenida durante el período 2021–2023, las variables asociadas a inversión

extranjera directa evidencian una marcada volatilidad, particularmente en 2023. Esta divergencia confirma que los conflictos socioambientales no generan necesariamente una contracción generalizada del aparato productivo, sino que afectan con mayor intensidad las decisiones de inversión de mediano y largo plazo, tal como lo sostienen Martínez y Martínez (2021) al analizar la relación entre actividades extractivas y desarrollo económico en contextos ecuatorianos.

Desde una perspectiva econométrica, la relación negativa y estadísticamente significativa estimada entre el índice de conflictividad y la variación de inversión sectorial permite inferir que el incremento en la intensidad de disputas territoriales eleva la percepción de riesgo económico. En este sentido, Rojas Vega et al. (2023) argumentan que la conflictividad ambiental en unidades mineras se asocia con deterioro de la confianza empresarial y reconfiguración de estrategias corporativas. En consonancia con ello, la identificación de la judicialización y la duración del conflicto como variables explicativas relevantes en el modelo LASSO resulta coherente con lo planteado por Aquino-Centeno (2022), quien destaca que la juridificación comunitaria prolonga la incertidumbre institucional y amplía los costos de transacción.

Asimismo, el coeficiente de correlación de Spearman evidenció una asociación negativa moderada entre intensidad conflictiva e inversión extranjera directa, lo que sugiere que la conflictividad actúa como mecanismo de ajuste en expectativas económicas. Desde esta óptica, Venegas-Sahagún y Gran-Castro (2023) sostienen que cuando las disputas socioambientales se articulan con discursos de injusticia ambiental y derechos humanos, el impacto se proyecta hacia la estabilidad económica y la gobernanza empresarial, generando escenarios de mayor cautela inversora.

No obstante, el crecimiento sostenido del empleo formal y del número de empresas activas revela una capacidad adaptativa del tejido empresarial interno. En consecuencia, puede afirmarse que las organizaciones locales presentan mecanismos de resiliencia frente a tensiones territoriales, lo cual se alinea con lo señalado por López-Nevárez et al. (2022), quienes enfatizan que la integración de la responsabilidad social a la estructura organizacional fortalece la capacidad de respuesta ante presiones externas. Sin embargo, dicha resiliencia no elimina la exposición a riesgos acumulativos cuando los conflictos se prolongan o escalan en intensidad.

De igual manera, los resultados permiten sostener que la conflictividad socioambiental incide principalmente en sectores territorialmente expuestos, particularmente aquellos vinculados a recursos naturales y actividades extractivas. Mansilla et al. (2022) evidencian que los conflictos socioambientales generan reconfiguraciones estratégicas en empresas que operan en zonas de alta sensibilidad ecológica, condicionando la viabilidad de proyectos y modificando trayectorias de expansión. En términos complementarios, Uribe-Sierra (2023) subraya que la gestión empresarial del conflicto exige incorporar principios de justicia ambiental y debida diligencia, dado que el cumplimiento normativo formal resulta insuficiente para sostener legitimidad social en entornos de alta presión comunitaria.

En consecuencia, la discusión confirma que los conflictos socioambientales constituyen un determinante relevante de la sostenibilidad empresarial, especialmente en lo que respecta a decisiones de inversión y

estabilidad financiera. Si bien el sistema productivo formal mantiene dinamismo en términos de empleo y número de unidades activas, la contracción de la inversión extranjera directa sugiere que la conflictividad territorial influye de manera significativa en la evaluación de riesgo y en la confianza económica. Por consiguiente, el fortalecimiento de mecanismos de gobernanza territorial, transparencia corporativa y gestión preventiva del conflicto emerge como condición necesaria para mitigar impactos adversos y consolidar entornos empresariales estables en contextos de alta sensibilidad socioambiental.

CONCLUSIONES

Los hallazgos obtenidos permiten establecer, en primer término, que la conflictividad socioambiental constituye un determinante estructural que incide de manera significativa en las decisiones de inversión de mediano y largo plazo dentro del tejido empresarial. Si bien los indicadores asociados al número de empresas activas y al empleo formal registrado evidencian una trayectoria de crecimiento durante el período analizado, la marcada contracción de la inversión extranjera directa en 2023 revela que los flujos de capital son particularmente sensibles a escenarios de incertidumbre territorial. En este sentido, la evidencia empírica demuestra que la intensidad de los conflictos, medida a través de su frecuencia, duración y grado de judicialización, se asocia negativamente con la variación de inversión sectorial, lo cual confirma que la percepción de riesgo institucional y social incide directamente en la evaluación estratégica de proyectos intensivos en capital.

En segundo lugar, el análisis econométrico permite concluir que no es únicamente la existencia de eventos conflictivos lo que afecta el desempeño empresarial, sino la complejidad institucional que los rodea. La judicialización prolongada, la recurrencia territorial y la persistencia temporal de disputas socioambientales incrementan los costos de transacción, dilatan procesos administrativos y generan efectos acumulativos sobre la confianza económica. En consecuencia, la conflictividad actúa como un factor multiplicador de incertidumbre, especialmente en sectores extractivos y de infraestructura que dependen de estabilidad normativa y legitimidad social para sostener operaciones de largo horizonte. De esta manera, el impacto económico se configura como resultado de la interacción entre tensión social, gobernanza territorial y capacidad institucional de gestión.

En tercer término, los resultados permiten afirmar que el aparato productivo interno exhibe una capacidad adaptativa relevante frente a escenarios de tensión territorial, evidenciada en el crecimiento sostenido del empleo formal y en la expansión del número de empresas activas. No obstante, esta resiliencia operativa no elimina la vulnerabilidad estructural asociada a la volatilidad de la inversión externa y a la incertidumbre en proyectos de alta exposición ambiental. Por consiguiente, la sostenibilidad empresarial en contextos de conflictividad socioambiental no depende exclusivamente del dinamismo interno del mercado, sino de la consolidación de mecanismos de gobernanza territorial, transparencia institucional y gestión preventiva del conflicto que permitan reducir la prima de riesgo y fortalecer la estabilidad económica.

En síntesis, el estudio demuestra que la conflictividad socioambiental no debe interpretarse como un fenómeno marginal o coyuntural, sino como una variable estratégica que condiciona la trayectoria de la actividad

empresarial en economías con alta dependencia de recursos naturales. Su impacto se manifiesta principalmente en la dimensión inversora y en la confianza económica de largo plazo, lo que exige integrar la gestión del conflicto como componente central de la planificación estratégica empresarial y de las políticas públicas orientadas a la sostenibilidad productiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade Tacca, C., & De la Cruz Huanca, O. (2022). Responsabilidad social empresarial una estrategia para promover y garantizar la protección del derecho fundamental al medio ambiente sano y equilibrado. *Revista de Derecho Ambiental* (Santiago), (18), 189–221. <https://doi.org/10.5354/0719-4633.2022.66370>
- Añasco, L. (2021). Responsabilidad social empresarial en el sur del Perú: gestión de conflictos sociales desde una mirada de responsabilidad social empresarial. *Revista Revoluciones*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4395218>
- Aquino-Centeno, S. (2022). Experticias y juridificación comunitaria: defensa del subsuelo y tierras comunales en Oaxaca, México. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, (72), 13–32. <https://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.5022>
- Carrasco, C., Contreras, C., & Rincón, A. (2021). Reprimarización de la economía y conflictos socioambientales en el sur de Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales*, 27(4), 240–254.
- Díaz Herrera, C., Contero Ossa, J., & Bejarano Gaitán, O. (2021). Conflictos socioambientales por hidrocarburos y justicia ambiental en Puerto Gaitán, Colombia. *Investigación y Desarrollo*, 29(2), 1–22. <https://doi.org/10.14482/indes.29.2.301.1>
- Hernández-Sánchez, S., Monsalve, F., & Escobar-Granada, M. (2023). Influencia de la ecoinnovación en el desempeño sostenible de las empresas turísticas: análisis empírico en Colombia. *Letras Verdes*, (34), 181–200. <https://doi.org/10.17141/letrasverdes.34.2023.5892>
- Hoyos, O., Castro Duque, M., Toro León, N., Trejos Salazar, D., Montoya Restrepo, L. A., Montoya Restrepo, I. A., & Duque, P. (2023). Gobierno corporativo y desarrollo sostenible: un análisis bibliométrico. *Revista CEA*, 9(19), e2190. <https://doi.org/10.22430/24223182.2190>
- Loera-González, L. E. (2023). Propuestas para la resolución de conflictos socioambientales: el caso de Tres Huastecas y la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa. *Región y Sociedad*, 35, e1876. <https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1876>
- López-Nevárez, V., Arciniega-Galaviz, M. A., Díaz-Aboytes, M. L., & Gálvez-Bon, L. C. (2022). Interacciones entre la responsabilidad social y sus elementos organizacionales: estudio multicaso en pymes. *Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 32(59), 1–22. <https://doi.org/10.24836/es.v32i59.1202>

- Mansilla Obando, E., Molano Camargo, F., & Vera Piñeros, D. (2022). Conflictos socioambientales en el Páramo de Santurbán: actores y repertorios de acción. *Letras Verdes*, (31), 100–125. <https://doi.org/10.17141/letrasverdes.31.2022.5500>
- Martínez Salvador, G., & Martínez Salvador, L. A. (2021). Conflictos socioambientales, actividades extractivistas y el desarrollo económico en Ecuador. *Argos*, 38(78), 1–17. <https://doi.org/10.33996/argos.v38i78.1526>
- Maturana, S., Gutiérrez, R., & Cartagena, N. (2022). Acuerdos extrajudiciales y disputas socioambientales en Chile: el caso de Alto Maipo. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, (72), 139–160. <https://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.4816>
- Navarrete, C., & Herrera, M. (2023). Impacto de la contabilidad ambiental en las empresas del sector minero en Ecuador. *Revista Científica Zambos*, 2(2), 37–49.
- Peña-Palma, C., Terán-Serna, J., Gil-Torres, Á., & Tafur-Osorio, M. (2021). Educación popular: una alternativa en la resolución de conflictos socioambientales. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, (69), 99–119. <https://doi.org/10.17141/iconos.69.2021.4470>
- Quizhpe, C., & Vallejo, I. (2022). Procesos de juridificación y defensa del agua en el sur andino del Ecuador. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, (72), 33–56. <https://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.5033>
- Rodríguez, R., Arellano, A., Contreras, D., & Herrera, V. (2021). Conflictos socioambientales y recursos comunes: una aproximación desde el análisis de redes. *Región y Sociedad*, 33, e1424. <https://doi.org/10.22198/rys2021/33/1424>
- Rojas Vega, J. A., Brito Gonzales, E., Medrano Acuña, W., & Leiva Chauca, O. C. (2023). Relación de la responsabilidad empresarial en los conflictos medioambientales y sociales en una unidad minera de la región Ancash. *Epistemia Revista Científica*, 7(1), 69–82. <https://doi.org/10.26495/re.v7i1.2436>
- Rojas, E. (2023). La ingobernanza territorial como causa de los conflictos socioambientales en el Ecuador. *Revista PUCE*, 117, 85–104.
- Suárez, Y., Gómez, M., & García, M. (2021). La utilidad de los informes de sostenibilidad en entidades públicas y privadas en Colombia: la percepción de los stakeholders. *Contaduría Universidad de Antioquia*, 79, 103–136.
- Uribe-Sierra, C. (2023). Conflictos socioambientales y responsabilidad empresarial: elementos para una agenda de justicia ambiental. *Revista Andamios*, 20(52), 1–20. <https://doi.org/10.29092/uacm.v20i52.1015>
- Valenciano-Hernández, M. S. (2021). ¿Agua para quién? Movilización comunitaria y negociación en el conflicto socioambiental del Parque Los Chorros, Costa Rica. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, (69), 35–51. <https://doi.org/10.17141/iconos.69.2021.4504>

- Venegas-Sahagún, B. A., & Gran-Castro, J. A. (2023). Injusticia ambiental y violaciones de los derechos humanos en Jalisco, México. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, (77), 197–216. <https://doi.org/10.17141/iconos.77.2023.5788>
- Vilca, J., Luján, M., & Coronel, E. (2021). Conflictos socioambientales y responsabilidad social empresarial en la dinámica minera. *Revista del Instituto de Ciencias de la Salud*, 19(1), 195–202. <https://doi.org/10.18004/riics.2021.junio.195>
- Vilca, W., Loa, E., Ramírez, Á., & Medina, C. (2021). Responsabilidad social empresarial minera y los conflictos socioambientales en el Perú. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 17(1), 195–215.
- Zárate, R., Rodríguez, J., & Suárez, A. (2021). Protests and social conflict in Latin America. *Estudios Gerenciales*, 37(161), 652–664. <https://doi.org/10.1016/j.estger.2021.10.010>

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe conflicto de interés posible.

Financiamiento:

No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.

Nota:

El artículo no es producto de una publicación anterior.